

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 30 º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-20523-2023
CARATULADO : MEDINA/FISCO DE CHILE - CDE

Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco

VISTOS:

Con fecha 5 de diciembre de 2023 comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, mandatario judicial, domiciliado en calle Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1104, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en representación de don Patricio Enrique Medina Hernández, antropólogo, domiciliado en 2 calle Quintay N° 4.657 – B, departamento 13, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana y, éste en representación convencional de don **Eduardo Arturo Medina Hernández**, sociólogo, domiciliado en Vagersta 11, 72691, Skultuna, Suecia, quien interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario de hacienda, en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, todos domiciliados en calle Agustinas N° 1.225, piso 4, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Indica que el actor nació el 1 de enero de 1957, siendo hijo de don Raúl Eduardo Medina Cabezas y doña Malva Graciela Hernández Castillo, quien ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura, por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II, bajo el número 5.198.,

Expone lo vivido de la siguiente manera: *“El 26 de diciembre de 1976, teniendo 19 años, fui detenido por Carabineros en mi domicilio en Las Condes. Era un domingo temprano en la mañana cuando mi padre me pidió que yo me fuera de la casa. Como le dije que no me iría salió en auto y sin decirme nada fue a la comisaría. Un conflicto*



anterior, de carácter generacional, había terminado con la presencia de Carabineros y donde un oficial me dio sermones para que me quedara tranquilo ya que, como me dijo, era “un privilegio tener un dormitorio con vista al Manquehue y estar estudiando en la universidad”.

Pero este domingo llegó un grupo de carabineros con una actitud totalmente distinta. Un capitán y dos carabineros de tropa con metralletas entraron a mi dormitorio. Lo primero que hizo el oficial fue gritarme: “¡Párate, conchetumadre!”. De inmediato comprendí que esta vez la denuncia tenía un carácter político (luego supe que mi padre les había dicho que tenía un mirista en la casa). “A ver los libritos, huevón”, me dijo, y empezó a tirar mis libros desde el estante hacia el suelo en el medio de la pieza. Como yo estudiaba ya el tercer año de sociología tenía un montón de libros y muchos de ellos eran de carácter social y político. “Literatura marxista”, decía mientras los tiraba. En un momento le dije, “perdón, ese libro que acababa de tirar no puede ser marxista, pues es del Marqués de Sade, quien existió harto tiempo antes que Marx”. Como lo había dejado como ignorante frente a sus subalternos, tomó el libro Escritos filosóficos y políticos del Marqués de Sade y lo tiró de vuelta al estante con mucha violencia. Entonces empezó a observar con mayor cuidado y fue así como no se atrevió a tirar un libro titulado Para leer al Pato Donald, el cual sí se podría decir que es marxista, pues es un análisis crítico de la penetración ideológica del imperialismo a través de las series de Walt Disney. Fueron los dos únicos libros que se salvaron, pues los demás se los llevaron todos (llegarían conmigo más tarde hasta el cuartel de la DINA).

De la casa me llevaron en un furgón de Carabineros (una “cuca”) a la 24a Comisaría, en Las Tranqueras. No eran las nueve de la mañana todavía. En el vehículo se me ocurrió sacar mi agenda y le arranqué rápidamente una página en la que tenía nombres de personas de la Vicaría y me la tragué. Los pacos empezaron a



pegarme y detuvieron el vehículo. El oficial, que iba adelante, dio la orden de que me esposaran y me tiraran al suelo. Así continué el viaje en el piso del furgón junto a mis libros.

Al llegar a la comisaría me llevaron directamente a la sala de oficiales y mi ingreso no quedó registrado en ninguna parte, lo que ya me empezaba a indicar lo que vendría. Uno de los oficiales de más grado (de unos 40-45 años) dijo que él tenía un amigo que trabajaba en la DINA. Salió a llamar por teléfono y cuando volvió dijo que me vendría a buscar la DINA. Los oficiales me hacían preguntas bastante agresivas, pero no me golpearon. Yo no les contesté sus preguntas y les dije que no tenía sentido que les contestara si es que además iba a ser interrogado en otro lado. De repente un oficial que miraba por la ventana dijo “ahí llegaron”.

Me puse de pie para mirar y antes de que me bajaran y me sentaran de nuevo alcancé a ver un auto Chevrolet Opala o Nova de color rojo entrando al estacionamiento. Luego entró a la sala un agente de la DINA de unos 35-40 años, de rasgos muy comunes por lo que es difícil describirlo. El comportamiento entre él y los oficiales fue muy natural, tan natural que no recuerdo cómo se saludaron (o incluso si es que se saludaron). El agente pidió una venda para ponerme, pero como en la comisaría no tenían vendas trajeron algo así como una tira de género delgada, la que apenas llegamos al cuartel de la DINA me la cambiaron por otra más ancha. Uno de los oficiales, que había quedado molesto con mi respuesta un rato antes le dijo al agente de la DINA: “Va a hablar con ustedes, pues dice que él habla una sola vez”. No era lo que yo había dicho, pero lo dijo así, como vengándose.

Vendado y esposado a la espalda me llevaron de la comisaría al auto. Al caminar sentí que la piel en el cuello se me congelaba, es decir empecé a sentir miedo. Ahora iba solo con la DINA con rumbo desconocido y sin que nadie supiera. Me pusieron en parte en el piso y en parte recostado sobre el asiento trasero y luego me taparon con



una frazada. Con la cabeza sentía el arma que uno de los agentes tenía en su cintura.

Conociendo sólo la existencia de la Villa Grimaldi en aquella zona creí durante 38 años haber pasado por ahí. Fue en octubre de 2016, cuando leí el libro La danza de los cuervos: el destino final de los detenidos desaparecidos de Javier Rebolledo (Editorial Planeta 2016, edición original 2012), que descubrí que en 1976 yo fui llevado al cuartel Simón Bolívar y no a Villa Grimaldi, el cual está ubicado en la misma zona de La Reina.

El auto se detuvo, me llevaron caminando y esposado unos metros hacia el oriente hasta llegar frente a una edificación. Ahí esperé unos minutos junto a un agente que me hacía guardia, mientras me tenían parado contra una muralla. Me dio la impresión de que no habían decidido a dónde yo iría así es que uno de los agentes fue a averiguar qué harían conmigo. Cuando volvió me cambiaron la cinta de la vista por una venda grande y ancha. Me la pusieron bien apretada y me llevaron de vuelta unos metros hacia el poniente y luego caminamos otros metros hacia el sur, donde entramos a un local. Yo calculo que había unos 20 metros desde la entrada al recinto hasta este local o instalación, al que también recuerdo que entramos por el lado norte. Esta instalación estaba ubicada un poco hacia la derecha (hacia el poniente) desde donde yo llegué (por el norte).

En este local, esposado y vendado, me sentaron en una silla y empecé a ser golpeado, principalmente con laques en la espalda. La habitación en que me tenían se sentía amplia. Mientras me preguntaban diversas cosas uno de los agentes escribía en forma permanente con un lápiz de mina, pues yo escuchaba el lápiz en el papel. Además de los agentes que me hacían las preguntas y que me golpeaban había un agente, que puede haber sido el mismo que escribía, que hacía preguntas sólo de vez en cuando, pero esas eran preguntas con un mayor grado de elaboración o de conocimiento. Los demás se quedaban callados cuando éste preguntaba, lo que me hace



pensar que tenía más rango que los demás o alguna especialidad, como por ejemplo que hubiera sido psicólogo.

No recuerdo si yo nombré a mi hermano Rodrigo a propósito de algo o ellos me preguntaron por él directamente. Rodrigo Medina Hernández, de 18 años, militante del MIR, estaba desaparecido hacía ya más de seis meses y los agentes me preguntaron por él, que dónde estaba, que la gente no desaparecía así no más, etc. Les contesté que ellos eran los que debían saber, pues el 27 de mayo lo había detenido la DINA. Me contestaron que ellos no tenían ni idea de él. A mí me pareció algo paradójal que ellos respondieran, pues no era yo el que interrogaba ese día.

Leían cosas de mi agenda y me hacían preguntas: “aquí tenís anotada una hora al psicólogo, ¿por qué vai al psicólogo?” Respondí que sólo tenía estrés. Entonces el agente que parecía tener más conocimiento me preguntó “¿qué tipo de estrés tenís?”. Esto me hizo pensar que ese agente sabía algo de psicología.

En un momento de este interrogatorio uno de los agentes tomó uno de mis libros, las Cinco tesis filosóficas de Mao Tse Tung, y leyó una línea en voz alta. Luego dijo: “Esta frase la tenís subrayada, ¿estai de acuerdo con esto?”. Hoy no recuerdo la frase misma, pero en ese momento sí la recordaba y le contesté que yo no estaba de acuerdo con ello y por eso lo había marcado con una cruz al margen (yo recordaba muy bien cómo lo había marcado en el libro). Lo que el agente no sabía era que justamente esa frase era un divisor de aguas entre diferentes interpretaciones dentro del mismo marxismo. “¡Ah! Entonces vos soi simpatizante no más”, dijo. “Sí -le contesté- así se podría decir”, sabiendo que mi estrategia ese día era no acusarme yo mismo de nada. Así encontré que “simpatizante” era una muy buena categoría.

En algún momento trataron de quebrarme emocionalmente. Me habían preguntado si tenía polola y yo había respondido



negativamente. Tampoco me habían encontrado dinero en mis bolsillos. Además, me sacaban en cara que había sido denunciado por mi propio padre: “Vos soi un pobre hueón”, me decían, “no tenís polola, no tenís plata, te denuncia tu viejo. Vos soi un pobre desgraciado”.

Me decían: “algo de verdad tiene que haber en la denuncia de tu padre, pues no es posible que él haya inventado todo esto para puro irse de vacaciones”. A lo que les contesté que fueran a mi casa y vieran ellos mismos que él efectivamente se había ido. “Nosotros no estamos pal hueveo, él tendría que pagar por esto”. Bueno -les dije- arréglenlo con él, pues así es.

Luego de haberme golpeado durante un par de horas, principalmente con laques, pero además algunas patadas y golpes de puño, de repente se quedaron todos en silencio y escuché que alguien venía entrando. Alguno dijo: “ahora sí que vay a hablar, conchetumadre, porque ahora llegó el viejo, y con el viejo todos hablan”. Con esas palabras me hicieron sentir miedo. Este “viejo” pidió que le pasaran un laque y comenzó a golpearme brutalmente sin siquiera preguntarme algo, hasta que caí al suelo. Me imagino ahora que leí el libro *La danza de los cuervos* que este “Viejo” puede haber sido Héctor Valdebenito Araya, el “Viejo Valde”. Un perro, como lo describe Jorgelino Vergara tanto en el libro de Rebolledo como en entrevistas en la televisión.

Pero como no lograban obtener información que les interesara, en un momento uno de los agentes dijo “a la parrilla con este hueón”. Sin embargo, su proposición no tuvo eco, a pesar de que efectivamente había una parrilla apoyada en una muralla, la que vi por debajo de la venda en un momento posterior en que me trasladaron a una sala contigua. La sala de oficiales descrita en *La danza de los cuervos* tenía, además de escritorios, “una litera metálica parada a un costado” (p. 112). Es muy probable que ellos (o el jefe de ellos)



presintiera ya que iban a tener que soltarme y por eso no me parrillaron.

Fue en ese momento que les dije: “Bueno, si la única posibilidad para que ustedes me dejen de golpear es que yo les diga algo, no me queda entonces otra cosa que empezar a inventar historias”. Esta frase, junto al hecho de que ya me habían maltratado durante algunas horas sin obtener nada, resultó en que me dejaron de golpear.

Casi todos los agentes se fueron y quedé solo con uno o dos agentes. Luego de un rato de esta tranquilidad llevaron un perro, creo que para medir mi reacción. Seguramente observaban cómo reaccionaba yo cuando, esposado de una mano a algo así como un poste y la otra esposada a la silla en que estaba sentado, sentí el pelaje de un perro grande que pasaba por mis brazos. Luego el perro me olió y me lamió las manos, lo que supongo era parte de un proceso intimidatorio o de prueba. Afortunadamente no mostré temor, pues yo todavía no sabía que tenían tantos perros más enjaulados afuera.

Con este momento de tranquilidad comenzó un tratamiento distinto. Uno de los agentes empezó a hacer el papel del bueno y me ofreció dar una pitiada al cigarrillo que él estaba fumando, cuando ya le quedaba lo último. Me acercó el pucho y, con cierto temor que me lo pusiera con la brasa hacia mis labios, le di una bocanada o dos. Le agradecí. Recuerdo que crucé algunas palabras con él, preguntándole algo así como su edad, pues era un hombre muy joven. Me contestó que era un par de años mayor que yo (si él era el Mocito lo dijo para despistarme, pues el mocito era en realidad casi dos años menor que yo, es decir que en ese entonces debiera haber tenido 17 o 18 años). Le pregunté por qué él trabajaba ahí, pero no recuerdo más de este corto diálogo, fuera de que me contestó en forma evasiva.

Poco más tarde, dos agentes me llevaron a una habitación colindante, más pequeña y que olía a cocina, para darme un plato de comida antes de soltarme, “para que no vayai a decir que aquí te



tratamos mal y que no te dimos comida”, me dijo uno de los agentes. Creo que el otro, el que me dio la comida, era el mismo que había hecho el papel de bueno anteriormente (¿podría este haber sido el Mocito, quien era el encargado de la cocina en Simón Bolívar?). Sin estar seguro de que realmente me soltarían decidí comerme el plato de comida.

La comida que me dieron era una sopa similar al afrecho con un pedazo de grasa de vacuno en el medio y un trozo de pan duro. Esto lo pude ver porque me permitieron mirar el plato por debajo de la venda mientras me sujetaban la cabeza para que no fuera a levantarla y mirar hacia adelante. Me habían subido un poco la venda para que pudiera ver el plato, pues cuando me soltaron una mano de la esposa y me pasaron una cuchara para que comiera yo no encontraba el plato y había golpeado la mesa un par de veces con la cuchara buscándolo. Todo esto me indica que no era una rutina de ellos darle comida de esta forma a los detenidos.

Desde esta cocina me sacaron de ese local. Caminé junto a un agente unos 20 metros hacia el sur. Fue ahí cuando pasamos junto a una o varias jaulas con perros que me ladraban agresivamente cuando caminábamos a lo largo de ellas (esas jaulas estaban a mi lado derecho, es decir hacia el poniente). Ya que al parecer no hay más relatos de detenidos que hayan visto o escuchado perros enjaulados indica que este es un cuartel del que no hay más narraciones.

Luego me subieron a un auto y me sacaron la venda, poniéndome cinta adhesiva en los ojos y un par de lentes oscuros encima. El auto anduvo otros 20 metros hasta llegar a la salida sur. Sentado en el medio del asiento trasero incliné la cabeza un poco hacia atrás y pude ver hacia adelante por debajo de la cinta adhesiva y de los lentes. Un guardia, que estaba apostado al lado izquierdo de la salida (es decir hacia el oriente), caminó unos metros y abrió un gran portón negro. La salida daba a una calle propiamente tal, con



cunetas y veredas. Por la vereda opuesta había un murallón pintado (no blanco, sino de un tono entre amarillo y naranja muy suave) y el vehículo dobló hacia la derecha, es decir hacia el poniente. Fue ahí cuando uno de los agentes, creo que fue el chofer, dijo: “cuidado, que está mirando ese hueón” y me presionaron la cinta en los ojos nuevamente.

Antes de abandonarme en la rotonda de Colón con Tomás Moro, cerca de las tres de la tarde del mismo día (26 de diciembre de 1976), uno de los agentes me dio unas monedas “para que pudiera tomar micro”. Luego me di cuenta de que se estaba burlando, pues lo que me dio no alcanzaba ni siquiera para un pasaje. Al bajarme del vehículo me dijeron que contara hasta cien antes de sacarme la cinta adhesiva de los ojos. Yo estaba contento de haber salido de ese lugar y, sin sentir que mi cuerpo estaba todo golpeado, caminé hasta la casa de una familia amiga”.

En cuanto a los fundamentos de derecho, indica que los hechos relatados son constitutivos de crímenes de lesa humanidad, según lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, pero cuya prohibición y sanción ya constituía norma de ius cogens, a la época de los hechos perpetrados. Estos actos, constituyen delitos consumados de secuestro calificado y aplicación de tormentos en perjuicio de la víctima, ocasionando el deber del Estado de reparar a las víctimas de las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos, en virtud de los principios del derecho internacional.

Sostiene que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos, es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad que exista falta o culpa por parte del agente. En consecuencia, no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado.



Ahora bien, esta responsabilidad se encuentra consagrada en normas del Derecho Público Chileno, en específico el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República de 1980, al consagrar una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando por su actividad provoquen un daño a una persona.

Luego, la naturaleza de esta responsabilidad está contenida en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, todas ellas, normas propias del Derecho Público, excluyendo la aplicación de normas civiles, lo que ha sido establecido por la doctrina y la jurisprudencia.

Por otra parte en cuanto a la improcedencia del derecho de daños para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos humanos, indica que: 1) no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común; y, 2) las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias, de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos, edificios en ruinas o de animales sueltos, extraviados y fieros. En consecuencia, estas normas son insuficientes para resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cuando han cometido crímenes de lesa humanidad.

Ahora bien, respecto a la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado, argumenta que debe ser tratada como un deber en virtud del Principio IV de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, el que indica “[...] Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional”. De este modo, el



fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos.

Afirma que existe un daño de carácter moral, el que puede entenderse como aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico. De este modo, el carácter indemnizable del daño moral no cumple sólo una función reparatoria, sino también compensatoria, ya que la indemnización del daño moral pretende hacer de nuevo la vida más liviana a quien ha soportado una dura carga.

Ahora bien, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha expresado que *“El daño moral entendido como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto afecta la integridad psíquica del individuo y que se traduce en el agobio que genera el haber sufrido una lesión considerable y el riesgo para su vida que ello representó, no requiere de prueba, las consecuencias que nacen de su propia naturaleza son obvias y lógicas, que no pueden desconocerse en ningún procedimiento aunque se aprecie la prueba en forma legal, pues el mínimo razonamiento, criterio o principio lógico, demuestra que una lesión tan considerable necesaria e indefectiblemente conlleva una aflicción psíquica. Ahora bien, su evaluación debe hacerse conforme a la prueba tasada o legal y a la apreciación prudencial del sentenciador, lo que es distinto a la afirmación de que el daño moral requiere prueba. La dimensión del daño moral se obtiene indudablemente y sin lugar a discusión, de las pruebas consideradas por la juez a quo en la sentencia, de esta forma, necesariamente el actor debe ser indemnizado, pues el artículo 2314 del Código Civil no distingue*



clases o tipo de daños” (Excma. Corte Suprema de Justicia, sentencia dictada en causa rol ingreso N° 5946-2009).

Concluye señalando que el daño moral se hace patente por sí mismo, por lo que sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud para determinar el monto de la reparación pecuniaria. Por esta razón, demanda el pago de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para la víctima y actor en autos, por concepto del daño moral sufrido producto del accionar ilícito de agentes estatales en su contra, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo con el IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda, hasta su completo pago, más las costas del juicio; o lo que el Tribunal estime prudencialmente en justicia.

Finalmente, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenberg, todos ya individualizados, pidiendo el pago de la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a don Eduardo Arturo Medina Hernández, por el daño causado por agentes del Estado; o la suma que el tribunal determine prudencialmente y en justicia, con reajustes de acuerdo con el IPC, más intereses legales, ambos desde la fecha de notificación de esta demanda o desde cuando esta judicatura estime oportuno; acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado a pagar al demandante civil la suma señalada, o la que el Tribunal en prudencia determine, más las costas del juicio.

Con fecha 26 de marzo de 2024, se notificó al demandado.

Con fecha 18 de abril de 2024, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contestó la demanda, solicitando su rechazo o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVHTXTDXMHR

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral y satisfactiva por haber sido ya indemnizado el actor.

Afirma que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Sostiene que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la Ley N°19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Refiere que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.234 y N° 19.992 y sus respectivas modificaciones. De este modo, se estableció una pensión anual de reparación y otorgó beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de



derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas, estableciendo una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422 para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Además, refiere que se concedió a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Afirma que se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores; y también beneficios en vivienda, correspondiente al acceso de subsidios de vivienda.

Asimismo, manifiesta que, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH., se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Colige que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como



patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos.

Manifiesta que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos, como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Sostiene que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

Por lo anterior, el demandado opone la excepción de prescripción de cuatro años establecida en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, habría transcurrido el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Advierte que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y



requiere siempre declaración explícita, la que, en este caso, no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras.

Agrega que la prescripción es una institución universal y de orden público, estando consagrada en las normas del Título XLII del Código Civil, y en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Hace presente que la Excma. Corte Suprema, con fecha 21 de enero de 2013, dictó una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia, en virtud de la facultad contemplada en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, señalando respecto a la prescripción, lo siguiente: a) el principio que debe regir la materia es la prescriptibilidad de la responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad es la excepción; b) que los tratados internacionales, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil, en cambio, la imprescriptibilidad puede referirse sólo a la responsabilidad penal; c) no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse, debe recurrirse al derecho común, esto es, cuatro años desde la perpetración del acto, de conformidad al artículo 2.332 del Código Civil; y, d) el plazo de prescripción debe contarse desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron



con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño.

Indica que debe considerarse que, en la especie, se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. Para ello, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción patrimonial, destaca que ni la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad," ni los "Convenios de Ginebra de 1949," ni la "Resolución N° 3.074 de 1973," ni la "Convención Americana de Derechos Humanos" establecen la imprescriptibilidad para acciones civiles indemnizatorias.

Afirma el demandado que, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no se puede apartar del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.



En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada.

Indica que el daño moral consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. De esta forma, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

Sostiene que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por lo que ésta no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el



Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Afirma que, sin desconocer la gravedad de los hechos de violación a los derechos humanos ocurridos en dictadura y en los cuales se funda el daño, no existe norma alguna que permita presumir la concurrencia del daño moral no mucho menos invertir el peso de la prueba, puesto que la parte demandante debe probar la ocurrencia de éste.

Añade que la concurrencia y valoración de los perjuicios morales, no se puede dar por establecida con el sólo hecho de haberse incorporado los nombres de las víctimas en las nóminas libradas por los órganos encargados de materializar los beneficios de las leyes de reparación, estableciéndose incluso que, a falta de mayor prueba, dichas pretensiones deben ser desestimadas.

Luego, el Tribunal ha de establecer los hechos materiales que determinan la existencia del daño invocado, los aspectos que reflejan su ilegitimidad y los factores que tiene en consideración para proceder a su regulación, tarea a la cual aportan el cúmulo de herramientas de las que se deja constancia con precedencia.

En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Sostiene que deben considerarse todos los pagos recibidos por los actores de conformidad a las leyes de reparación y que seguirán percibiendo a título de pensión, conjuntamente a los beneficios extrapatrimoniales, puesto que todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Concluye señalando que, de no accederse a la petición, implicaría un doble pago por un mismo hecho, contraviniendo los



principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, alega que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia acoja la demanda y establezca esta obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada y mientras el demandado se encuentre en mora.

Con fecha 29 de abril de 2024, el demandante evacuó el trámite de la réplica.

Afirma respecto a la excepción de reparación integral que las pensiones de sobrevivencia otorgadas por el Estado en el periodo comprendido entre 1973 y 1990, no reparan íntegramente el dolor experimentado por el actor en calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales. Además, la Ley N° 19.923, en su artículo 24 no considera incompatibles las pensiones de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral.

Luego, respecto a la excepción de prescripción, indica que la acción no se encuentra prescrita, puesto que la acción para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado no establece plazo, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República.

Agrega que, la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios de Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil.

Concluye señalando que la reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las



acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad, concediendo la indemnización que corresponda.

Con fecha 10 de mayo de 2024, el demandado evacuó el trámite de la dúplica, reiterando sus defensas expresadas en el escrito de contestación.

Con fecha 27 de mayo de 2024, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 17 de octubre de 2024, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Eduardo Arturo Medina Hernández interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho latamente consignados en lo expositivo de la presente sentencia.

SEGUNDO: Que la parte demandada contestó el libelo, pidiendo su rechazo, al tenor de lo narrado en lo expositivo de este fallo.

TERCERO: Que se fijaron los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, respecto de los cuales debía recaer la prueba:

1. Efectividad que el demandante ha sufrido los perjuicios descritos en el libelo pretensor. En la afirmativa, naturaleza y monto de los perjuicios;
2. En su caso, efectividad que dichos perjuicios son imputables al actuar de la demandada;
3. Relación de causalidad entre el actuar de la demandada y los perjuicios demandados;
4. Efectividad que el demandante fue reparada por el daño extrapatrimonial alegado. En la afirmativa, tipo de reparación obtenida y efectividad de ser satisfactiva.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVHTXTDXMHR

CUARTO: Que, a fin de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó los siguientes documentos:

A folio 1:

1. Certificado de nacimiento de don Eduardo Arturo Medina Hernández;
2. Copia simple de la carpeta de antecedentes de la Comisión Valech II, correspondiente a don Eduardo Arturo Medina Hernández;
3. Certificado emitido con fecha 13 de octubre de 2022 por doña Marcela Cerda González, del Área Memoria, Archivos y Documentación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, indicando que don Eduardo Arturo Medina Hernández se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, bajo el número 5.198;

A folio 3:

4. Informe clínico de daño psicosocial, emitido el 27 de julio de 2023, en la ciudad de Los Ángeles, por doña Carola Chávez Cárdenas, psicóloga del Programa PRAIS, Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, respecto de don Eduardo Arturo Medina Hernández;

A folio 18:

5. Sentencia dictada con fecha 29 de noviembre de 2018, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Órdenes de Guerra y Otros Vs. Chile.

QUINTO: Que, asimismo, la demandante ofreció prueba testimonial, consistente en las declaraciones de don Cristian Alberto Galaz García, don Carlos Alberto Quezada Almeyda y doña Virginia Mabel Zenteno Wodehouse, prestadas en audiencia llevada a cabo con fecha 1 y 2 de agosto de 2024, rolante a folios 30 y 48.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVHTXTDXMHR

SEXTO: Que la demandada solicitó oficiar al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informara todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el actor, recibíéndose respuesta de tal institución el 20 de mayo de 2024, agregada a folio 22.

SÉPTIMO: Que son hechos pacíficos en la presente causa, por no haber mediado controversia entre las partes, los siguientes:

1.- Que el día 26 de diciembre de 1976, don Eduardo Arturo Medina Hernández fue detenido por Carabineros de Chile desde su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes.

2.- Que, durante su detención, que duró unas horas, fue objeto de apremios físicos, psicológicos y torturas de diversa entidad.

3.- Que el actor ha sido reconocido como víctima en el Listado de víctimas de prisión política y torturas, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II, bajo el número de registro 5.198.

OCTAVO: Que la presente acción corresponde a una demanda de indemnización de perjuicios, deducida por don Eduardo Arturo Medina Hernández en contra del Fisco de Chile, por el daño moral sufrido en su calidad de víctima de prisión política y tortura durante el régimen militar.

En consecuencia, junto con analizar si concurren los requisitos para acoger la pretensión del actor, es procedente referirse previamente a las defensas esgrimidas por el demandado, las que se circunscriben a la reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante y a la prescripción.

NOVENO: Que, en efecto, alega la demandada que el actor ya se encontraría indemnizado de los perjuicios padecidos, por haber recibido su reparación integral mediante transferencias de dinero, beneficios de salud (PRAIS) y gestos simbólicos, de manera que, al



haberse compensado los daños morales sufridos, no pueden ser exigidos nuevamente.

DÉCIMO: Que conforme a lo consignado en el oficio ORD DSGT N° 23386/2024 de 20 de mayo de 2024, suscrito por el Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, consta que el demandante ha recibido como reparación la cantidad total de \$28.943.575, suma de la cual \$27.446.174 corresponden a pensión por beneficio Ley N° 19.992; \$1.000.000 por aporte único Ley N° 20.874 y \$497.401 por concepto de aguinaldos, siendo su pensión mensual actual de \$242.262.

UNDÉCIMO: Que las transferencias de dinero realizadas al actor, los beneficios de salud y las reparaciones simbólicas a que alude la demandada, no conllevan –necesariamente- la reparación íntegra de los daños padecidos por el actor en su calidad de víctima de prisión política y tortura, y que el Estado de Chile se encuentra obligado a proporcionar.

En efecto, el propio artículo 24 de la Ley N° 19.123 prescribe en su inciso primero que: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*, reconociendo que éste puede obtener otras reparaciones, como sería aquella decretada, de ser procedente, por los tribunales de justicia vía acción indemnizatoria.

Lo anterior, se fundamenta considerando que las reparaciones otorgadas por la legislación, han sido concedidas y determinadas por el propio Estado, en términos generales y únicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, de manera que su efecto reparador no necesariamente es pleno.

Que, además, los beneficios otorgados por la Ley N°19.123, dicen relación más bien con prestaciones de carácter asistencial y patrimonial, lo que marca una diferencia ostensible con la reparación del daño moral. Así, las pensiones mensuales de reparación, la



bonificación compensatoria, los beneficios médicos y educacionales, guardan una mayor armonía con los conceptos de daño emergente y lucro cesante, de manera que de estimarse y probarse que el daño moral inferido excede las mencionadas pensiones o es independiente a ellas, no existe razón suficiente como para, de antemano, rechazar la demanda.

Que en el mismo sentido se viene pronunciando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia: *“La normativa invocada por el Fisco – que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido producto de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley”* (Sentencia Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 12.636-2018).

Conforme a lo que se ha venido exponiendo, cabe desestimar la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

DUODÉCIMO: Que respecto a la excepción de prescripción extintiva, el Fisco de Chile indica que entre la fecha en que se hizo exigible la indemnización y la fecha de notificación de la acción, ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, por tratarse de una materia de responsabilidad extracontractual; y en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 relación al artículo 2514, ambos del Código Civil.



DÉCIMO TERCERO: Que la excepción de prescripción opuesta lleva a cuestionarse si la acción civil que deriva de un delito de lesa humanidad, se sujeta a las normas internas que rigen en el ámbito patrimonial donde está consagrada esta institución, o bien, por el contrario, y por la trascendencia de la materia en discusión, escapa de la reglamentación interna, sometiéndose a una normativa supralegal e internacional, relativa a los Derechos Humanos.

Tal controversia –y la postura que se adopte- no resulta baladí. En efecto, de estimarse que la prescripción opera íntegramente en estos casos, la acción civil derivada de dichos ilícitos podría prescribir al transcurrir cinco años de cometidos los hechos, o desde la fecha en que existiera certeza que el actor pudo ejercer la acción. A la inversa, de considerarse que la reglamentación patrimonial es inaplicable, la acción civil sería imprescriptible.

DÉCIMO CUARTO: Que, para zanjar tal problemática, es necesario considerar que si bien no existe norma -ni nacional ni internacional- que se pronuncie derechamente sobre el particular, este silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad).

Esta postura, determinante en el ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las conductas que se persigue sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los agentes del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de las personas.

Ahora, si bien no existe dicho dictamen en el área civil, el mismo fundamento puede extrapolarse a este ámbito. Más aún, los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos integrados a nuestra normativa conforme al inciso segundo del artículo 5º de la Carta



Fundamental, y la propia legislación interna dictada a consecuencia de dichos crímenes, propenden a una reparación integral tanto de sus víctimas como de sus familiares, lo que necesariamente incluye el resarcimiento monetario, el que por derivar de un delito de lesa humanidad, trasciende su naturaleza meramente patrimonial, marcando un contraste con el ilícito civil común.

Así las cosas, la reparación integral que se persigue para aquellos que han sido víctimas de los actos ejecutados por el Estado de Chile en tiempos del régimen militar, debe incluir tanto una persecución penal y un resarcimiento civil que no esté condicionado por el transcurso del tiempo. Solo así, una vez indemnizadas todas aquellas personas que fueron afectadas en dicho período por actos de agentes del Estado, se cumplirá con aquella reparación completa a que Chile se ha comprometido tanto internacionalmente como ante el propio país.

DÉCIMO QUINTO: Que en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al consignar: *“en el caso de delitos de lesa humanidad, como el que sustenta la demanda de los actores, siendo la acción penal persecutoria imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación integral de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, ...”* (Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N°12.636-2018).

Con todo lo dicho, dada la naturaleza y contexto de los ilícitos fundantes, esta magistrada se inclina por la postura de una



imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil, lo que conducirá al rechazo de la excepción de prescripción opuesta.

DÉCIMO SEXTO: Que, ahora, entrando en el fondo de la discusión de estos autos, cabe reiterar que don Eduardo Arturo Medina Hernández, demanda indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, con ocasión de la detención y torturas de que fue objeto, por parte de agentes del Estado, hecho indiscutido y no desconocido por la demandada, siendo incluso calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados.

Luego, siendo inconcuso el hecho dañoso del que deriva la responsabilidad del Estado hecha valer, cabe centrarse en la demostración del detrimento moral alegado por el actor.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el daño moral es, en términos generales, el menoscabo o agravio a un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a dolo o culpa de otro, que estaba obligado a respetarlo, en la especie, el Estado de Chile.

El daño moral tiene su causa en la transgresión al ordenamiento jurídico y su consecuencia es el sufrimiento causado en la víctima, producto de la limitación a un interés legítimo. Así, la persona titular de un derecho subjetivo o de un bien jurídico, al ser despojada de su legítimo goce, se le priva de su ejercicio y sufre como consecuencia un daño extrapatrimonial.

DÉCIMO OCTAVO: Que el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, desde que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

DÉCIMO NOVENO: Que si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por el actor - sino únicamente la procedencia o cuantía de la suma pedida a su respecto-, la parte demandante rindió prueba documental y testifical para justificar la indemnización por daño moral pedida.



VIGÉSIMO: Que en cuanto a la prueba documental, se destaca el informe de clínico de daño psicosocial, elaborado entre los meses de abril y mayo de 2023, por doña Carola Chávez Cárdenas, psicóloga del Programa PRAIS, respecto de don Eduardo Arturo Medina Hernández, señalando que durante varios años presentó un trastorno por estrés post traumático, verificando actualmente la presencia de daño psicológico manifestado a través de la presencia de sintomatología post traumática cronificada, que no configura el diagnóstico de trastorno, no obstante ha interferido en su vida de manera intermitente y ha tomado diversas formas de expresión e implicancias, significando un deterioro subjetivo del potencial de desarrollo, bienestar y calidad de vida.

Agrega que, el hecho de ser expulsado del país, si bien ha significado logros y factores positivos a nivel personal y familiar, también le ha generado una sensación de desarraigo, con sentimientos inconscientes de impotencia y rabia ante la dificultad que ha revestido la adaptación a otra cultura donde en un inicio no había redes de apoyo en lo laboral, familiar y económico.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, además, se rindió prueba testimonial, cuyas declaraciones convergen en que don Eduardo Arturo Medina Hernández fue objeto de persecución política por parte del Estado mientras era estudiante universitario, situación que derivó en su exilio.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, conforme al informe psicológico y las declaraciones de los testigos, es posible dar por acreditado que don Eduardo Arturo Medina Hernández presenta lesiones psicológicas producto de la detención y persecución política que sufrió a temprana edad.

VIGÉSIMO TERCERO: Que correspondiendo evaluar prudencialmente el daño moral padecido por el actor, considerando la entidad de las secuelas psicológicas, conforme a lo concluido por la



sicóloga en su informe, la duración de su privación de libertad -unas horas- y la reparación pecuniaria ya recibida por parte del Estado, este será estimado en la suma de \$6.000.000 (seis millones de pesos).

VIGÉSIMO CUARTO: Que la suma mencionada será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha que el fallo se encuentre ejecutoriado y devengará intereses corrientes desde que la demandada incurra en mora.

VIGÉSIMO QUINTO: Que atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estimando que la demandada ha tenido motivo plausible para litigar, se le eximirá del pago de las costas.

Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 47, 222, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

- I. **Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción.**
- II. **Que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios deducida, solo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a don Eduardo Arturo Medina Hernández la suma de \$6.000.000 (seis millones de pesos) a título de daño moral.**
- III. **Que la cantidad mencionada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha que el fallo se encuentre ejecutoriado, y devengará intereses corrientes desde que la demandada se constituya en mora.**
- IV. **Que no se condena en costas a la demandada por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.**



Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

ROL N° C – 20523 – 2023.

Pronunciada por doña Daniela Royer Faúndez, Juez Titular del
Trigésimo Juzgado Civil de Santiago.

En **Santiago**, a **treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco**, se notificó por
el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVHTXDXMHR